Señor(es)

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ**

judicial@movilidadbogota.gov.co

contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

agendamientovirtual@movilidadbogota.gov.co

ESD

**Ref.: Derecho de Petición.**

{% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural|upper }}**, quien se identifica con {{ complaining\_type\_id }} No. {{ complaining\_id\_number }}{% else %}**{{ legal|upper }}, sociedad debidamente constituida e identificada con Nit. {{** **complaining\_id\_number }}, representada por {{ legal\_representative\_name|title }} quien se identifica con {{ legal\_representative\_type\_id }} No. {{ legal\_representative\_id\_number }},**{% endif %} **con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las demás normas concordantes que lo regulan y desarrollan,** elevo ante ustedes el presente derecho de petición.

**PETICIONES**

1. **:** Se sirva:
   1. Solicito me sea asignada cita virtual indicándome fecha, hora y enlace para poder comparecer a la AUDIENCIA VIRTUAL de impugnación de manera virtual, para la orden de comparendo No. {{ fotomulta\_number\_new }}. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 1843 de 2017.
   2. Entender que me encuentro notificado por conducta concluyente a partir de la radicación de esta solicitud.

{%p if dp\_type == ‘dos\_agendamientos’ %}

* 1. Informe cómo su entidad garantiza el debido proceso respecto al proceso contravencional de todos mis comparendos teniendo en cuenta que la circunstancia de agendar UNA (1) sola audiencia hace que deba esperar meses para poder agendar el segundo comparendo y su entidad luego señala que se vencieron los términos para impugnar los otros comparendos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que agendar UNA (1) audiencia, solo me garantiza el debido proceso de ese comparendo y no de los otros que se encuentran bajo mi documento de identidad.

* 1. Informe ¿Cuál es el procedimiento para agendar más de UNA (1) audiencia virtual en su plataforma? Dado que a la fecha no es posible como se demostrará en los hechos del presente derecho de petición.
  2. Se sirva indicar que norma dispone como canal exclusivo para la radicación de audiencias la plataforma*:* <https://agendamiento.movilidadbogota.gov.co/AConect/Default>, a pesar de su defectuoso funcionamiento, lo cual constituye una flagrante violación a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1437 de 2011.

{%p endif %}

1. **:** Que en caso que su entidad decida negar las anteriores solicitudes se sirva:
   1. Exhibir prueba de los actos administrativos mediante el cual el Inspector convocó a la audiencia pública a fin de resolver la presente contravención, en cumplimiento del Art. 136 de la Ley 769 de 2002.
   2. Que, en caso de no encontrarse programadas a la fecha de respuesta de la presente solicitud, se sirva programarla e indicar la fecha, hora y enlace de la diligencia dando cumplimiento a la notificación en estrados de que trata el numeral 3, del Art. 136 de la Ley 769 de 2002, a fin de que pueda hacerme parte del proceso contravencional en la etapa procesal en la que se encuentre el mismo.
   3. Exhibir prueba de los siguientes documentos:
      1. Comprobante de envío de notificación personal del comparendo
      2. Comprobante de envío de la notificación por aviso del comparendo
      3. Publicación del aviso.
      4. Resolución en la que resuelve la presunta infracción.
      5. Acta de la audiencia realizada.
      6. Constancia de las citaciones para notificación y de las notificaciones realizadas.
      7. Información de contacto del RUNT que utilizó su entidad para enviar la citación para la notificación del fotocomparendo.
      8. Soporte documental en el que conste la fecha de validación del fotocomparendo por parte del agente de tránsito
      9. Certifique que el agente que validó el comparendo cuenta con la formación requerida para dicha función, de acuerdo con el numeral 3 artículo 3 de la Ley 1843 de 2017, artículos 3 y 7 de la Ley 1310 de 2009, artículo 6 de la Resolución 718 de 2018 del Ministerio de Transporte, en concordancia con el Concepto 187011 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
   4. De manera subsidiaria, solo en caso de que no se haya realizado la audiencia y me niegue ser parte de la misma, solicito me indique el fundamento jurídico que le permite prohibirme se parte para ejercer mi derecho de defensa en la audiencia que no ha realizado, teniendo en cuenta que en Colombia no existe norma legal que me prohíba ser parte de la audiencia y es mi derecho constitucional defenderme (art. 29 CP).
   5. Informar de forma clara y precisa los supuestos de hecho y de derecho que en cada caso en concreto le permitirían eventualmente desconocer la obligatoriedad de hacer una audiencia pública.
2. **:** Que, en caso de continuar su negativa a informar la fecha y hora de programación de la Audiencia, se sirva dar respuesta a los siguientes cuestionamientos:
   1. ¿Celebra su despacho audiencias públicas?
      1. De ser afirmativa la respuesta anterior, explique: ¿Qué norma absuelve o exonera a su entidad de brindar información a la persona del proceso al que se encuentra vinculado y le da derecho a negarle a la persona a asistir a una audiencia que por naturaleza es pública?
      2. De ser negativa, explique: ¿Que norma le permite a su entidad dictar fallo en un proceso contravencional sin la celebración de la audiencia pública a la que está obligada su entidad en los términos del artículo 136 de la Ley 769 de 2002?

**HECHOS**

{%p if dp\_type == ‘dos\_agendamientos’ %}

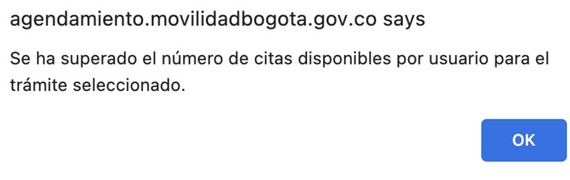
1. **:**Que me fue impuesto el fotocomparendo No. {{ fotomulta\_number\_new }}
2. Que una vez tuve conocimiento de la existencia del comparendo No. {{ fotomulta\_number\_new }} y con el fin de ejercer el derecho al **DEBIDO PROCESO**, en su esfera de defensa y contradicción, procedí a otorgar poder a DISRUPCIÓN AL DERECHO SAS para realizar el agendamiento a través de la plataforma <https://vus.circulemosdigital.com.co/#/login>como uno de los medios de agendamiento válido por su entidad.
3. Que la página web no permite agendar más de UNA (1) audiencia, independientemente del número de comparendos que su Entidad me haya impuesto. Es decir que por tener una cita para la orden de comparendo No. **{{ fotomulta\_number }}**, no se me permite agendar la audiencia del comparendo No. **{{ fotomulta\_number\_new }}.** Nóteseque al tratar de agendar otra audiencia la plataforma arroja la siguiente evidencia:

Prueba 1

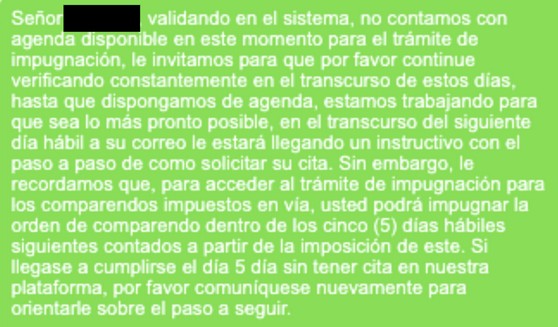
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

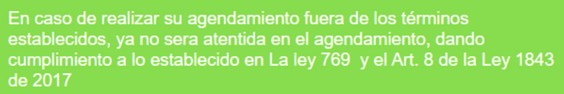
Prueba 2



1. Que impedirme agendar, constituye una vía de hecho por parte de ésta Secretaría, quien unilateralmente está impidiéndome el acceso a la justicia para poder controvertir todos los comparendos que la entidad decide imponerme sin cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-038 del 06 de febrero de 2020 pues en ningún caso identificó quien iba conduciendo.
2. Que agendar UNA (1) sola audiencia me obliga a esperar meses para poder agendar el segundo comparendo, y en consecuencia me impide garantizar el debido proceso, ya que mientras trato de agendar la segunda audiencia, su entidad de forma automática falla en contra, declarándome contraventor sin prueba alguna.
3. Que tratando a través de otros canales como lo es el chat, su entidad informa que no tiene disponibilidad para agendar:



1. Que su entidad señala que debe tratarse de agendar días después y que en tal momento orientarán a la persona para continuar con el trámite, pero en su ilegalidad luego los funcionarios señalan que la persona ya no se encuentra dentro del plazo para impugnar.



1. Dado lo anterior, su entidad no ha permitido que acceda a mi audiencia pública de impugnación de comparendo, al parecer con el único fin de sancionarme.

{%p elif dp\_type == ‘no\_disponibilidad’ %}

1. Que me fue impuesto el fotocomparendo No. {{ fotomulta\_number\_new }}.
2. Que la entidad menciona que dentro de los medios dispuestos para agendar una audiencia se encuentran: el chat y las llamadas a través de la plataforma de la Entidad.
3. Que una vez tuve conocimiento de la existencia del comparendo No. {{ fotomulta\_number\_new }}, y con el fin de ejercer el derecho al **DEBIDO PROCESO**, de defensa y contradicción, procedí a otorgar poder a DISRUPCIÓN AL DERECHO SAS para realizar el agendamiento a través de la plataforma <https://vus.circulemosdigital.com.co/#/login>como uno de los medios de agendamiento válido por su entidad.
4. Que se realizaron múltiples intentos de agendamiento por los diversos canales dispuestos por la Secretaría, donde se evidenció la imposibilidad de realizar el agendamiento, toda vez que la misma se encuentra restringida a máximo dos agendamientos al día por cada usuario. (Ver anexos).
5. Que su Entidad está en la obligación de convocar a la realización de la Audiencia Pública, a fin de indicar los motivos del fallo, que siendo este el último estadio procesal donde puedo ejercer mi derecho a la contradicción y defensa, requiero conocer la fecha y hora de la misma, a fin de poder ser notificado en estrados de tal decisión, tal y como lo indica el Art. 136 de Ley 769 de 2002.
6. Que lo anterior es violatorio del artículo 12 de la Ley 1843 de 2017, respecto de la comparecencia virtual establece que, “*quienes operen sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones de tránsito, implementará igualmente mecanismos electrónicos que permitan la comparecencia a distancia del presunto infractor*”.

{%p endif %}

1. Que impedirme agendar, constituye una vía de hecho por parte de ésta Secretaría, quien unilateralmente está impidiéndome el acceso a la justicia para poder controvertir todos los comparendos que la entidad decide imponerme sin cumplir con los postulados constitucionales.
2. Que no poder agendar mi audiencia me impide garantizar el debido proceso, ya que mientras realizo múltiples intentos, su Entidad de forma automática falla en contra, declarándome contraventor sin prueba alguna.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

1. **DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.**

De la aplicación del debido proceso administrativo se derivan una serie de consecuencias, tanto para la administración como para las personas. La Corte Constitucional ha reconocido que de este derecho se desprenden una serie de garantías, como las que tienen las personas a: 1) conocer las actuaciones de la administración; 2) acceder ante la administración y ser oído por ella; 3) solicitar el decreto y la práctica de pruebas y controvertir las que otros soliciten y las que se practiquen; 4) ejercer el derecho de defensa; 5) impugnar los actos administrativos; y, 6) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. Estas garantías deben respetarse en todo el procedimiento administrativo, desde el inicio de la actuación, la formación y expedición de los actos administrativos, su notificación o comunicación, su impugnación y resolución, su ejecutoriedad y hasta su ejecución.

* ***De la garantía de acceso ante la administración - Fallas en la plataforma*** [***https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio***](https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio)

En su esfera de acceso a la administración, encontramos que el mismo puede materializarse a través de la realización de procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos, tal como lo dispone el art. 53 de la Ley 1437 de 2011:

*“Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración,* ***la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.***

*En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.”*

Ahora bien, vemos que esta posibilidad de realización de tales procedimientos y tramites por vía electrónica, imponen a la administración la carga de que los mecanismos dispuestos sean suficientes y adecuados, y en caso de no poder garantizar tal idoneidad deberán permitir el uso alternativo de otros procedimientos. Para el caso en comento, tenemos que la Alcaldía, en cabeza de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá ha dispuesto la plataforma [***https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio***](https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio)como el UNICO medio remoto para el agendamiento de las audiencias de impugnación, no obstante, como ya se expuso en los hechos de la presente solicitud la misma presenta fallas de forma frecuente, toda vez que a pesar de que permite ingresar la misma presenta un bloqueo en el calendario de agendamiento de audiencias, por “falta de disponibilidad”, y brindando como única alternativa de solución seguir intentando de forma indefinida hasta que la misma tenga un cupo disponible; mientras que de forma paralela los términos se vencen y los funcionarios profieren la sanción, sin convocar previamente a la audiencia pública.

Lo anterior, a pesar de ser un acto procedimental pone una talanquera en el acceso a la administración, que viene a configurarse posteriormente como una vulneración al debido proceso, toda vez que impide al presunto infractor participar en el proceso sancionatorio que se le sigue.

Dado lo anterior, resultaba procedente la solicitud de agendamiento de audiencias a través del derecho de petición, como medio alternativo para realizar tal procedimiento, ante el deficiente funcionamiento del medio tecnológico ([***https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio***](https://vus.circulemosdigital.com.co/#/inicio)***)*** dispuesto por la administración para tal fin.

**Por lo que la negativa de agendamiento alegando que solo es posible por medios electrónicos es una barrera injustificada por parte de la administración e impone una carga al administrado que no está obligado a soportar, causándole un grave perjuicio, esto es la imposición de la sanción, sin una garantía previa de contradicción.**

* ***Del ejercicio al derecho a la defensa- Comparecencia a la audiencia pública.***

En primer orden tenemos que, según lo dispuesto en el artículo 136 y 137 del C.T., el presunto contraventor queda vinculado al proceso con la notificación a la que el mismo artículo hace alusión, no obstante, es en la AUDIENCIA PÚBLICA donde: *“se practicarán las pruebas”* y “*se sancionará o absolverá al inculpado”,* dicha decisión será notificada en estrados, a través de la lectura del acta, aún si el citado no comparece.

En ese sentido tenemos que la audiencia pública es el último estadio procesal que tiene el presunto contraventor para aportar o controvertir pruebas, por lo que resulta indispensable que el mismo tenga conocimiento previo de la fecha de realización de la diligencia, a fin de que pueda presentarse a la misma.

Ahora bien, pueden presentarse dos escenarios frente a los cuales el imputado puede asumir una actitud procesal con consecuencias claras así:

1. El imputado conoce de la fecha de realización de la audiencia y decide no participar en la audiencia, por lo que en aplicación al principio de autorresponsabilidad asume las consecuencias de no ejercitar su derecho a la defensa.
2. El imputado conoce de la fecha de realización de la audiencia y comparece, ejerce su derecho a la defensa independiente de que el fallo sea favorable o no.

Como se ha visto el ejercicio al derecho a la defensa está supeditado al conocimiento previo de la fecha y hora de la realización de la audiencia, razón por la que, a pesar de haber guardado silencio en etapas procesales anteriores, si el imputado decide presentarse a tal diligencia deberá brindarse todas las garantías para el ejercicio de contradicción, so pena de asumir las consecuencias de las etapas procesales agotadas, en atención a la preclusión procesal.

La H. Corte Constitucional en sentencia del 29 de octubre del 2009 ha señalado:

*“Así mismo, como lo ha señalado esta Corporación, los recursos y el ejercicio de ciertos derechos dentro de los procesos judiciales y administrativos, van acompañados de un ¿deber de diligencia procesal mínima de los sujetos intervinientes, y por tanto, es constitucionalmente admisible que el sujeto que los incumpla, deba asumir los efectos negativos de su conducta.* ***Así, si el investigado, conoce previamente la realización de la audiencia****, y, aun así, no asiste, perdería la oportunidad de interponer los recursos contra las decisiones que se profieran en el curso de la misma”.* (Negrilla fuera de texto).

Es decir que el presupuesto inicial del ejercicio de defensa es el conocimiento previo de la realización de la audiencia. Ahora bien, a este punto es necesario preguntarse, ¿es posible acudir a tal diligencia, si a pesar de haberle solicitado a la entidad la fecha y hora de la misma la entidad es renuente a entregar tal información o en su defecto guarda silencio? Claramente no, toda vez que el administrado no le es posible conocer tal información a menos que la entidad la suministre.

Dado lo anterior, resulta reprochable la actitud renuente de algunas entidades a revelar tal información a una persona con legítimo interés en el proceso, apartándose con ello de los postulados que rigen cualquier actuación de la administración. Tal decisión resulta errática por parte de la administración y extremadamente gravosa para el presunto contraventor, que debe responder por una sanción impuesta a partir de una formulación de cargos basados en pruebas meramente enunciadas y nunca trasladadas para su conocimiento, es el equivalente a la valoración probatoria de la justicia inquisitiva con una valoración a espaldas del acusado, donde se cumple con la notificación inicial como un trámite meramente formal, pero se le niega el acceso a la información del proceso que se sigue en su contra, lo que impide que el presunto infractor pueda ejercer una defensa material, frente a lo que se le imputa, como etapa previa a la gravosa consecuencia jurídica anunciada, esto es la sanción.

En palabras de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-159 de 2002, se vulnera el debido proceso cuando el funcionario pretermite una etapa procesal **o alguna formalidad,** desconociendo con ello las garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que:

“(...) *puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas, entre otras”.*

Ahora bien, podría esta Autoridad permitir que el presunto infractor ejercite su derecho a la contradicción, otorgándole la posibilidad de asistir a la audiencia de impugnación toda vez que, habiéndose convocada la audiencia por el Inspector, el afectado pueda hacer parte de la misma para ejercitar su defensa en ese momento procesal.

Sumado a ello se tiene que el principio de la publicidad es transversal a todas las actuaciones de la administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

*“(…)*

*9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.”*

Que así mismo, el artículo 29 de la Ley 1712 de 2014 establece que:

“***Todo acto de ocultamiento****, destrucción o alteración deliberada total o parcial* ***de información pública****,* ***una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado*** *en los términos del artículo*[*292*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr011.html#292)*del Código Penal*”.[[1]](#footnote-1)

En análisis de constitucionalidad de dicho artículo, la Corte en Sentencia C-274-13 del 05 de marzo del 2014, estableció que:

*“(...) tendrá responsabilidad penal quien cometa cualquier acto que implique (i)* ***ocultamiento****, (ii) destrucción o (iii) alteración,* ***de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud.*** *Este acto de ocultamiento, destrucción o alteración (1) deberá ser deliberado y (2) podrá ser total o parcial. La consecuencia que se sigue penalmente para quien incurra en uno de tales actos, es la misma que se establece en el artículo 292 del Código Penal.*

*(...)*

***El bien jurídico que la disposición legal tutela es, específicamente, el derecho a acceder a la información pública****. La norma del Código Penal a la cual se remite el artículo objeto de análisis en el presente proceso, para indicar cuál es la pena que se impondría, protege la información pública en general, sin tener en cuenta otras consideraciones. En el caso de la norma estatutaria en consideración, además del ocultamiento y la destrucción, total o parcial de la información pública, se condena la alteración de ésta, una vez haya sido objeto de una solicitud, y* ***sin importar si dicha información es útil o no como prueba. Se trata entonces de una estricta medida de protección del derecho de toda persona a acceder a información pública veraz y cierta, sin alteración o modificación, sin que sea negada o, sencillamente, desaparecida****”. (Negrillas propias).*

En vista de lo anterior, se está a tiempo de precaver una violación al debido proceso que derive en la nulidad de lo actuado, si la autoridad administrativa informa al implicado mediante la respuesta a este oficio de la fecha y hora de la realización de la audiencia.

**PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN**

Que las pretensiones del presente escrito, específicamente la tendiente a que se brinde la información completa de la diligencia de audiencia que se sigue para motivar la sanción, dentro del proceso contravencional al que queda vinculado, ante la no impugnación dentro de los 11 días, resultan procedentes en ejercicio del **DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, consagrado en Ley 1712 de 2014, y que a su vez tiene el carácter de derecho fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder.

Que tal derecho de acceder y deber de las entidades de brindar la información, que tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles.

El acceso a la información es un ejercicio diario que los ciudadanos llevan a cabo para acercarse a la administración pública, conocer información general y de interés, y garantizar otros derechos. Así, el derecho de acceso a la información pública no sólo es fundamental para hacer control social a la administración pública, conociendo sus actuaciones, sino que también es esencial para la realización y ejercicio de otros derechos fundamentales, tal y como se pretende en el caso concreto.

**PRUEBAS**

1. Las obrantes en el expediente del presente proceso contravencional.
2. Capturas de pantalla de intentos de agendamiento.

La respuesta la recibiré al correo electrónico:

* {{ ouremail }}

No obstante, lo anterior, se aclara que esta dirección es solo para recibir la respuesta a este derecho de petición y por lo tanto no autorizo ninguna notificación judicial o administrativa.

Atentamente,

{{ Signature }}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

{%p if client\_type == ‘Persona Natural’ %}

**{{ natural|upper }}**

{{ complaining\_type\_id }} No. {{ complaining\_id\_number }}

{%p else %}

{{ legal\_representative\_name|title }}

**Representante Legal**

**{{ legal|upper }}**

{%p endif %}

1. ***“****ARTÍCULO 292. DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO****.*** *El que destruya, suprima u* ***oculte*** *total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.*

   *Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad”.* (Negrillas propias) [↑](#footnote-ref-1)